ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL JUEVES 27 DE ENERO DE DOS MIL CINCO.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

1

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN DEBATE, Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
53/2002	<p style="text-align: center;">ORDINARIA DE 2005</p> <p>INCIDENTE DE INEJECUCIÓN de la sentencia de 23 de mayo de 1991, dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, hoy Juzgado Décimo de Distrito "B" en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el expediente del juicio de amparo indirecto número 46/87, promovido por Armando Bernal Estrada y coagraviado.</p> <p>(PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO JUAN DÍAZ ROMERO)</p>	<p style="text-align: center;">2 A 44</p>
24/2004	<p style="text-align: center;">ORDINARIA TRES DE 2005.</p> <p>RECURSO DE RECLAMACIÓN interpuesto por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del auto de 6 de enero de 2005, dictado por el Ministro Instructor en el incidente de nulidad de actuaciones en la controversia constitucional número 109/2004, por el que se desechó, por notoriamente improcedente, el citado incidente.</p> <p>(PONENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS)</p>	<p style="text-align: center;">45 A 49, HASTA 56 Y 57 INCLUSIVE.</p>

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL EN PLENO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, CELEBRADA EL JUEVES VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL CINCO.

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

ASISTENCIA: SEÑORES MINISTROS:

**SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
JUAN DÍAZ ROMERO.
GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ.
OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO.
JUAN N. SILVA MEZA.**

AUSENTE: SEÑORA MINISTRA:

MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS: 11:35 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión, dé cuenta señor Secretario con los asuntos listados para el día de hoy.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor, con mucho gusto.

Se somete a la consideración de los señores Ministros, el proyecto del acta, relativa a la sesión pública número seis ordinaria, celebrada el martes veinticinco de enero en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A consideración del Pleno, el acta con la que se ha dado cuenta, consulto ¿si en votación económica se aprueba?

(VOTACIÓN)

APROBADA.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN NÚMERO 53/2002. DE LA SENTENCIA DE 23 DE MAYO DE 1991, DICTADA POR EL JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, HOY JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO "B" EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO 46/87, PROMOVIDO POR ARMANDO BERNAL ESTRADA Y COAGRAVIADO.

La ponencia es del señor Ministro Juan Díaz Romero y en ella se propone:

PRIMERO: EXISTE INEJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO SUBSTITUTO DE PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL UNO, ENGROSADO EL DÍA SIETE SIGUIENTE, EMITIDA POR EL ENTONCES JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL; AHORA JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO "B" EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO 46/87 Y SENTENCIA DE FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL UNO, PRONUNCIADA POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL RECURSO DE QUEJA NÚMERO UA343/2002 QUE DECLARÓ INFUNDADO ESTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN DEDUCIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRECISADA EN PRIMER TÉRMINO.

SEGUNDO: EL INCUMPLIMIENTO ES EXCUSABLE PUES DICHAS RESOLUCIONES NO SON JURÍDICAMENTE EJECUTABLES EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUERON PRONUNCIADAS; EN CONSECUENCIA SE DECLARA SU INSUBSISTENCIA, ASÍ COMO LA DE TODAS AQUELLAS ACTUACIONES DETERMINACIONES, PROVIDENCIAS O RESOLUCIONES EMITIDAS, TANTO POR EL JUEZ DE DISTRITO COMO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO RESPECTIVO, QUE SE RELACIONAN CON SU CUMPLIMIENTO.

TERCERO: NO DEBEN APLICARSE AL SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA, LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN XVI, DEL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL, RELATIVAS A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.

CUARTO: LA CUANTÍA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN CUMPLIMIENTO SUBSTITUTO A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN EL JUICIO DE AMPARO 46/87, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA Y A FAVOR DE LAS SUCESIONES A BIENES DE GABRIEL RAMOS MILLÁN Y ARMANDO BERNAL ESTRADA, ASCIENDEN A \$199,760,839.20 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 20/100) POR UNA EXTENSIÓN DE 33 HECTÁREAS, 32.68 HECTÁREAS, O SU EQUIVALENTE 333,268

METROS CUADRADOS, QUE DEFENDIERON EN EL JUICIO DE AMPARO DE ORIGEN.

QUINTO: LA AUTORIDAD RESPONSABLE A CONSIGNADO AL JUZGADO DE DISTRITO, \$60.000.000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS).

SEXTO: EXISTE UN SALDO INSOLUTO A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE \$139.760.839.20 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS SESENTA MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 20/100), QUE DEBERÁ PAGAR EN PARCIALIDADES DE \$30.000.000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100) ANUALES, Y LIQUIDAR EN SU TOTALIDAD, A MÁS TARDAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO FISCAL DE DOS MIL NUEVE, QUE PUEDE ADELANTAR SEGÚN SUS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, EL SALDO PENDIENTE DE PAGO SE SEGUIRÁ ACTUALIZANDO CONFORME AL MISMO MECANISMO ESTABLECIDO EN ESTA RESOLUCIÓN, HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

SÉPTIMO: QUEDA SIN EFECTOS EL DICTÁMEN DE NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DOS, EMITIDO POR LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 8/2001.

OCTAVO: SE ORDENA AL JUEZ DÉCIMO DE DISTRITO “B” EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL DISTRITO FEDERAL, QUE PROCEDA EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE ESTA RESOLUCIÓN Y QUE INFORME A ESTE ALTO TRIBUNAL DE MANERA REGULAR Y PERIÓDICA EL AVANCE A LO ORDENADO.

NOTIFÍQUESE: “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Suplico al señor Secretario, se sirva informar de un escrito y de un oficio, que llegaron el día de hoy en relación con este asunto.

Como el primero todavía alcanzó a ser acordado por la Presidencia, sírvase informar el Acuerdo respectivo.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Presidente.

Hoy a las ocho horas con treinta minutos, la parte quejosa presentó un escrito al que le recayó el siguiente Acuerdo Presidencial, de fecha veintisiete de enero: “Agréguese para que surta sus efectos legales consiguientes el ocurso de cuenta mediante el cual Guillermo Justiniano y Armando ambos de Apellido Bernal García Rojas, en su carácter de

albacea de la sucesión a bienes de Armando Bernal Estrada, Gabriel Ramos Millán Fernández, albacea de la sucesión a bienes de Gabriel Ramos Millán, expresan: “Primero: Tenernos por presentados con la personalidad que ostentamos realizando las manifestaciones contenidas en el cuerpo de este escrito.- Segundo: Tener a nuestras representadas, aceptando de manera expresa la propuesta del pago formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que se entreguen a esta parte quejosa, pagos anuales por treinta millones de pesos, cada uno hasta obtener el total cumplimiento de la ejecutoria.- Tercero: Considerar que el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el incidente de pago de daños y perjuicios derivado del juicio de garantías número 46/87, del Índice del Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se encuentra en vías de cumplimiento”. Notifíquese por lista”.

Y a las diez horas con catorce minutos fue presentado un oficio del Secretario de la Reforma Agraria, dirigido al Presidente de esta Suprema Corte, en el que le manifiesta lo siguiente: A fin de acreditar que la ejecutoria dictada en el citado juicio de garantías, que al rubro se le señala el Incidente de Inejecución 53/2002, al rubro citado, respetuosamente comparezco en el Incidente de Inejecución de Sentencia número 53/2002, a manifestar lo siguiente: A fin de acreditar que la ejecutoria dictada en el citado juicio de garantías se encuentra en vías de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, adjunto al presente copia certificada del oficio número 90052 del siete de enero del año en curso, mediante el cual el ciudadano Director Ejecutivo de la Coordinación para la Regularización de Predios e Indemnizaciones, solicitó al ciudadano Director General de Administración, que provea lo necesario a efecto de que se gestione la compra de un billete de depósito por la cantidad de treinta millones de pesos; lo anterior en base a la

propuesta formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridad vinculada con el cumplimiento, en el sentido de que se entregue a la parte agraviada pagos anuales por la cantidad antes citada hasta obtener el total cumplimiento de la ejecutoria de mérito por la vía sustituta.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Bien, a este último oficio debe recaer un acuerdo similar, que pase a sus autos para los efectos legales que proceda y precisar como se hizo en el acuerdo anterior, los planteamientos específicos que se hacen en el documento, tengo conocimiento de que estos, escrito y oficio fueron entregados al señor Ministro ponente para que tuviera previo conocimiento de los mismos y una vez hecha esta aclaración, paso el proyecto con el que se ha dado cuenta a la consideración del Pleno.

Ministro Díaz Romero, tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Gracias señor Presidente, es importante antes de que se vean y se oigan los pareceres de los señores Ministros, acerca de las proposiciones que se hacen en el proyecto, ver hasta que punto puede afectar las consideraciones correspondientes estos cursos que acaban de llegar, en primer lugar, la proposición que se hace por la parte quejosa, en el sentido de que se conforma, dice: “tener a nuestras representadas aceptando de manera expresa la propuesta de pago formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que se entreguen a esta parte quejosa, pagos anuales por treinta millones de pesos cada uno, hasta obtener el total cumplimiento de la ejecutoria”, para tomar en consideración la trascendencia que puede tener esta petición en relación con el proyecto que tienen en sus manos señores Ministros y que ya han tenido tiempo de examinar, quisiera yo hacer una distinción en lo que se refiere al juicio de amparo y a su

incidente de inejecución, el juicio de amparo, bien lo saben Sus Señorías, empieza con la demanda y después de correr traslado a las autoridades responsables y de la audiencia constitucional relativa, en donde se reciben las pruebas y se oyen los alegatos, se dicta la sentencia por parte del juez de Distrito y en contra de ella puede darse eventualmente el recurso de revisión del que conoce el Tribunal Colegiado de Circuito, una vez que el Tribunal Colegiado de Circuito, dicta la sentencia, ésta como ya se manifestó y se acordó en la sesión pasada, ya causa ejecutoria por ministerio de ley y es cosa juzgada, hasta aquí el procedimiento principal, a partir de la sentencia ejecutoriada, si es que concede el amparo, viene el incidente de ejecución, incidente que empieza con requerimientos que hace en este caso el juez de Distrito a las autoridades responsables para que cumplan con lo que dijo la ejecutoria, este procedimientos pues es perfectamente separado, relacionado pero separado respecto del juicio principal, cuando no se puede como en este caso regresar los terrenos a la parte quejosa, el artículo 107 fracción XVI y algunos artículos correspondientes de la Ley de Amparo permiten que en lugar de regresar las tierras se siga un procedimiento para valuar el bien que debía haberse devuelto, todo esto es materia y propio del procedimiento de ejecución, este procedimiento de ejecución tiene que pasar primero por el juez de Distrito, luego por el Tribunal Colegiado de Circuito, que en su caso si no se cumple lo ordenado por el juez de Distrito y confirmado por el Tribunal Colegiado, remite a la Suprema Corte para que en los términos de la Constitución y de la Ley de Amparo tome la determinación correspondiente. Aquí, con lo que manifieste la Suprema Corte de Justicia, con lo que determine es que finaliza el procedimiento de inejecución a que me estoy refiriendo y este procedimiento de inejecución si termina diciendo que es efectivamente como dijo el juez de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito, incumplida la autoridad responsable para dar la cantidad que se señaló en el Incidente

correspondiente, entonces se aplica lo que se establece en la Constitución y el titular de la autoridad responsable debe ser separado de su cargo y consignado ante el juez de Distrito como presunto responsable del delito de abuso de autoridad; delito que en el Código Penal llega hasta 9 años de prisión y; asimismo, se sigue requiriendo al sustituto, el titular para que cumpla con la ejecutoria. Esto es muy importante, porque como ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, inclusive en las ejecutorias y tesis correspondientes, esta determinación tan drástica no se otorga ni al juez de Distrito, ni al Tribunal Colegiado de Circuito en inejecución de sentencias es claro que esto solamente le corresponde a la Suprema Corte de Justicia; y esto es claro, porque siendo tan importantes las determinaciones que se toman aquí de tan alta trascendencia, tanto para el titular del Poder Ejecutivo correspondiente, en este caso sería al Secretario de la Reforma Agraria; debe ser la Suprema Corte la única que pueda verificar la necesidad y lo jurídico de que se hagan esas determinaciones. Repito, esto no se le otorga ni al juez de Distrito, ni al Tribunal Colegiado de Circuito; por tanto, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia revisar todo el procedimiento de inejecución sin tocar para nada como ya se dijo, lo que se resolvió en el juicio de amparo, en el principal y entonces tiene que identificar conforme al artículo 107 constitucional, en primer lugar, si es excusable o inexcusable el cumplimiento. Aquí ya se está de poder a poder, ya es una cuestión fundamentalmente jurídica, pero de trascendencia política y por eso precisamente se le otorga solamente a la Suprema Corte esta facultad. Dice en la fracción XVI, –que he citado dos o tres veces, lo siguiente, y que es lo que da pie, lo que da margen para que la Suprema Corte de Justicia pueda determinar si es excusable o inexcusable el cumplimiento- dice: “Si concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal y la Suprema Corte de Justicia estima que es

inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al juez de distrito que corresponda, consignación que se hace como lo señalan otros artículos por abuso de autoridad. En cambio, si fuere excusable el incumplimiento, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia, si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte procederá en los términos primeramente señalados; esto es, separando del cargo al titular y consignándolo ante el juez de distrito”; este procedimiento pues, de inejecución es muy especial, porque difiere de aquél que se sigue en el juicio principal y además tiene otros aspectos que han sido determinados ya por la Suprema Corte, con fundamento en criterios que ya han tenido oportunidad de ser transmitidos en el Semanario Judicial de la Federación; entre otros, que ese procedimiento es oficioso, lo sigue la Suprema Corte de Justicia, aunque no lo propongan las partes, tiene que determinar la Suprema Corte de manera oficiosa, la culminación de esa resolución, pues bien, quisiera yo leer brevemente algunos aspectos que como ustedes pueden ver en la copia del proyecto que les presento, están en algunas hojas, veo por ejemplo, la página doscientos once, viene el Considerando Vigésimo Séptimo en donde se dice lo siguiente: “El proveído de fecha nueve de octubre del año dos mil uno, el a quo tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada en la queja número 343/2001, y requirió a la Secretaría de la Reforma, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computadas, le remitiera copia certificada de las constancias que acreditaran el pago a la parte quejosa de la cantidad de mil doscientos catorce millones de pesos, sin perjuicio de que, en caso de existir fracciones de terrenos desocupadas, pudiera disminuirse el pago de modo proporcional.” Aquí es donde empieza el procedimiento a que yo me refería anteriormente, con requerimientos por parte del juez de distrito a la

autoridad responsable, - paso algunas hojas porque estoy transcribiendo muchas partes que son de interés, pero que ustedes ya han tenido oportunidad de leer - hay un escrito que se presenta ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que también hace el requerimiento en donde la autoridad responsable le dice: "Que se considere que la ejecutoria de mérito se encuentre en vías de cumplimiento, en virtud de que, por el momento, existe un obstáculo insuperable para acatar en sus términos el fallo que nos ocupa". Y firma por la Secretaría, en ese momento de la Reforma Agraria, el Subsecretario correspondiente.

No se opone, pues, la Secretaría de la Reforma Agraria a hacer el cumplimiento, lo único que dice es "no tengo el presupuesto correspondiente para pagar mil doscientos catorce millones de pesos".

Viene más adelante otro oficio de la autoridad responsable en donde en suma dice: "Así las cosas, y toda vez que el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la fecha no ha dado contestación alguna a la solicitud detallada en párrafos precedentes"; para esto debo decir, según ustedes recordarán señores Ministros, que la Secretaría de la Reforma Agraria ante la imposibilidad presupuestal de pagar esa cantidad, le envía un oficio a la Secretaría de Hacienda diciéndole que ponga a su disposición tal cantidad, por eso se explica esta parte donde dice: " Toda vez que el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la fecha no ha dado contestación alguna a la solicitud detallada en párrafos precedentes, se solicita a ese H. Tribunal Colegiado que se considere a dicho funcionario, es decir, al Secretario de Hacienda y Crédito Público, como autoridad competente para dar cumplimiento a la ejecutoria, en virtud de que esta

Secretaría de la Reforma Agraria no cuenta con la cantidad de un millón doscientos catorce mil millones”.

Esta petición de que se considerara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como autoridad substituta o concordante con la Secretaría no fue aceptada por el Tribunal Colegiado de Circuito, en la página 228, en la parte final, verán ustedes que dice: “Se le está solicitando la ampliación líquida del presupuesto para que la Secretaría de la Reforma Agraria pueda hacer frente a su obligación de cumplir la resolución incidental referida, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el 105, requiérase al Subsecretario”; aquí todavía lo estaba requiriendo pero posteriormente llega a la conclusión el Tribunal Colegiado de Circuito de que no puede ser considerado como autoridad substituta.

En la página 237 le subrayo, señores Ministros, casi al final, una parte que a mí me pareció muy importante, en donde el Tribunal Colegiado manifiesta: “Por tanto, el núcleo esencial de la prestación a la cual están obligadas las autoridades para dar cumplimiento a la ejecutoria por la vía substituta, se reduce a lo siguiente: Pagar a los quejosos la cantidad de mil doscientos catorce millones, lo anterior es así porque la Secretaría de la Reforma Agraria una vez realizadas las investigaciones pertinentes, con base en los elementos técnicos remitidos, determinó de manera categórica la no existencia de predios afectados”; recordarán los señores Ministros que el primer requerimiento que hizo el juez, le dijo a la Secretaría: “Paga mil doscientos catorce millones, o bien, si ya hay algunos otros terrenos que no se hayan ocupado, se los devuelves y es obvio que tendría que hacerse la disminución”, no se pudo hacer porque todo estaba ocupado. Y luego, en la página 238, dice el Tribunal Colegiado: “En consecuencia, toda vez que al cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y el pago de daños y perjuicios como cumplimiento substituto de

aquéllas, no está condicionado a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal correspondiente, con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se remite a la Suprema Corte de Justicia para que aplique la fracción XVI, del artículo 107 constitucional, y efectivamente, así lo remite a la Suprema Corte señalando de una manera clara y precisa el Tribunal Colegiado que se deben pagar mil doscientos catorce millones de pesos y aparentemente en una sola entrega, quiero decir que mientras tanto la Secretaría de la Reforma Agraria está consignando treinta millones de pesos y promete que seguirá dando los treinta millones de pesos anuales, pero eso es totalmente fuera del derecho dispositivo, la parte quejosa, porque la Suprema Corte de Justicia, según creo y siguiendo algunos precedentes, oficiosamente debe verificar la excusabilidad o inexcusabilidad del incumplimiento tal como está mandado por el juez de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito, y para eso tiene facultades, como ya he manifestado, que provienen del artículo 107, fracción XVI de la Constitución; entonces, pese a lo que se dice en el acuerdo con que se acaba de dar cuenta, a mí me parece, salvo la mejor opinión de los señores Ministros, que no es posible dejar así el cumplimiento, porque lo primero que tiene que hacer la Suprema Corte es verificar la excusabilidad o inexcusabilidad del incumplimiento, empezando por la revisión oficiosa que tiene obligación de hacer de todo el procedimiento de inejecución, porque lo que resuelva aquí, será la culminación de ese procedimiento. Por tanto, a mí me parece, señores Ministros, que esta petición que se hace pues simplemente debe, como dijo el auto de Presidencia, agregarse a sus autos para los efectos correspondientes, pero que no impide, a mi modo de ver, que se vea el proyecto que les estoy presentando y se tome la determinación que corresponda, claro todo ello previa la mejor opinión de Sus Señorías.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Ministro Díaz Romero. Continúa el proyecto a discusión del Pleno.

Señor Ministro Ortiz Mayagoitia tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Gracias señor Presidente. Todo incidente de inejecución que llega a esta Suprema Corte, encierra la posibilidad de que se ejerza la potestad que nos otorga el artículo 107, fracción XVI, es lo característico de la inejecución; sin embargo, no siempre concluimos con el examen de la pertinencia o no de establecer responsabilidad penal a la autoridad responsable. Tenemos una jurisprudencia muy andada en el sentido de que los incidentes de inejecución se deben declarar sin materia cuando durante su tramitación el juez de Distrito declara que la sentencia se ha cumplido, o bien, cuando directamente se acredita ante esta Corte Suprema que hay actos de cumplimiento, tendría yo innumerables ejemplos de tribunales judiciales o laborales que después de un dictamen del Tribunal Colegiado en donde se dice que han incurrido en incumplimiento, envían el laudo con la resolución con la que se cumple el amparo y el incidente se declara sin materia; sin que hagamos el examen de responsabilidad de la autoridad retroactivamente, esto es, al momento en que el Juez o el Tribunal Colegiado estimó que había inejecución. Esto es jurisprudencia que aplicamos –yo diría– que cada viernes en la Segunda Sala, y seguramente los señores Ministros de la Primera Sala la tendrán muy presente.

Otro punto a destacar, muy importante, es que esta Suprema Corte ha reconocido tres posibles vías jurídicas para cumplir una sentencia de amparo: La primera de ellas, es el efecto restitutorio que señala el artículo 80 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable vuelve las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación procesal.

Cuando esto se dificulta, el quejoso puede optar, a motu proprio, a petición de parte interesada, por la ejecución sustituta, o bien, la Corte tiene la potestad ya para declarar de oficio cuándo conviene hacer esta sustitución de la ejecución restitutoria para cambiarla por una indemnizatoria.

En la ejecución indemnizatoria, la regla general es que debe procederse al avalúo de los bienes afectados y conforme a los resultados de dictámenes periciales, se emita la condena correspondiente; pero también, y en esto se ha insistido y tenemos tesis expresas, existe la posibilidad de que las partes en el juicio de amparo –autoridad responsable y quejoso– convengan en los términos en que ha de llevarse adelante la ejecución de la sentencia de amparo. Creo yo que cualquiera de estas cosas que se acredite en el tránsito de un Incidente de Inejecución, nos debe llevar a declararlo sin materia.

¿Qué sucede en el caso? Primero, en la página 281 de autos del proyecto que nos presenta el señor Ministro Díaz Romero, se dice: “El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio de cuatro de abril del año dos mil tres, presentado en la misma fecha ante el Juzgado de Distrito, cuya copia certificada obra en autos, hizo las siguientes manifestaciones: “A fin de acreditar que conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo se encuentra en vías de cumplimiento la resolución dictada en el Incidente de Pago de Daños y Perjuicios, derivado del juicio de garantías en que se actuó, por la que se condenó a esta dependencia del Ejecutivo Federal al pago de \$ 1,214,174,040 (MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES, CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS), me permito manifestar lo siguiente: ...” Y en el punto número 1, dice: “El entonces Director Ejecutivo de la Coordinación para la Regularización de Predios e Indemnizaciones convocó a los CC.

Presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, en su carácter de representante de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; Titular del Órgano Interno de Control de esta dependencia; Directora General y Delegada Fiduciaria Especial del Fideicomiso "Fondo Nacional de Fomento Ejidal"; Director General de Asuntos Jurídicos, encargado del Despacho de la Oficialía Mayor del Ramo; Director en Jefe del Registro Agrario Nacional; Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural y Secretarías de la Reforma Agraria, integrantes del Comité de Regularización de Predios, Indemnizaciones y Compensaciones y Expropiaciones, para la celebración de la XXVII Sesión Extraordinaria de dicho Comité, la cual se verificó el veintitrés de marzo del dos mil tres."

Y dice a continuación: "Así las cosas, el día veintiséis de marzo del año en curso, se celebró la sesión extraordinaria descrita en el párrafo que antecede, y en forma unánime se acordó que a efecto de dar cumplimiento parcial a la ejecutoria de mérito por la vía substituta, se entregara a favor de la agraviada, la totalidad de los recursos económicos que a esta fecha ha entregado a esta dependencia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se traducen en la aportación inicial al Programa de Obligaciones Jurídicas para el año dos mil tres (dos), la cual asciende a \$20'000,000 (Veinte millones de pesos); no obstante, que con ello se dejen de cumplir ya en forma cabal substituta diversas ejecutorias del Poder Judicial".

Adelante habla de que se ha pedido a la Secretaría de Hacienda ,autorización para cubrir esta indemnización de 1214 millones, mediante exhibiciones anuales de \$30'000,000 (Treinta millones de pesos), con las cuales, con esta anualidad son tres.

Como resultado de esta propuesta para la forma de cumplimiento, la parte quejosa es quien se manifiesta inconforme y dice: “La única forma de cumplir con la ejecutoria dictada por el Poder Judicial Federal, es la exhibición completa de la suma que se ha determinado formalmente como cumplimentación substituta, pago que la autoridad debió realizar desde el nueve de octubre del dos mil uno, el cual asciende a 1214 millones.

Señores Ministros, que hubiera sucedido si frente a esta manifestación de la Secretaría de la Reforma Agraria, las quejas dicen: “Estamos de acuerdo”; pues no hay inejecución.

Este consentimiento, esta aceptación por parte de la quejosa, no se dio en ese momento, se viene a expresar ahora, y si por una oferta oficial de pago en parcialidades, finalmente es aceptada por la parte quejosa, pues esta es una forma que hemos admitido como vía de cumplimiento de una sentencia de amparo. Motivo por el cual, desde mi punto de vista personal lo que debemos hacer es mandar ratificar el escrito de cuenta, por lo que se dice de sus suscriptores y comprobada la autenticidad de estas firmas, debe declararse sin materia este incidente, sin meternos a calificar si la actuación de la autoridad al hacer este ofrecimiento, importaba incumplimiento de la ejecutoria y si este posible incumplimiento es o no excusable. Es ocioso ese trámite, cuando estamos viendo ya una solución definitiva de esto.

Quiero agregar que es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe de oficio las inconformidades, pero las más de ellas vienen bajo el impulso procesal de la parte quejosa, es muy raro que alguna autoridad venga a pedir que se le destituya y se le obligue a cumplir con la ejecutoria, no he visto el caso. Y tenemos también jurisprudencia, al

menos en inconformidad, en la que hemos dicho: “Si el quejoso desiste de la inconformidad bajo su propia aceptación, esto pone fin a la cuestión sin mayores consideraciones”.

Podríamos seguir la línea rigurosamente técnica que propone el señor Ministro Díaz Romero, pero yo invoco, en abono de los argumentos que ahora expreso, las dos tesis de jurisprudencia a las que me he referido.

Una, si está en tránsito un incidente de inejecución y de alguna manera se acredita que está cumplida la sentencia, ésta debe declararse sin materia. Estimo que aquí se puede acreditar convencionalmente con la aceptación de la propuesta inicial de las autoridades responsables. Dos, esta aceptación, este convenio, es forma legítima de dar cumplimiento a la sentencia.

Por eso, mi inclinación personal es en el sentido a que antes me refería, mandar ratificar el contenido y firma del escrito de cuenta y proceder en consecuencia.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Hay alguna duda que me asalta en la lectura que inició el señor Ministro Ortiz Mayagoitia, y que en esa parte no destacó, pero esto aun dentro del planteamiento que él está formulando podría tener importancia, y yo suplicaría al señor Ministro ponente o a la Secretaría, que pudieran aclararme lo siguiente:

Más delante de lo que leyó el Ministro Ortiz Mayagoitia dice en ese documento quien acudió por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria: “No omito manifestar que por oficio del nueve de agosto de dos mil dos, se acompaña en copia certificada como anexo cuatro, en base a diversas cuestiones jurídicas, solicité a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

que a fin de que en el presente caso no se realice un pago indebido, determinara la persona a quien se debe de entregar dicha indemnización, razón por la cual de considerarlo procedente, se pide a Su Señoría que sea entregado el billete que por esta vía se deposita en ese órgano jurisdiccional a la persona que en su caso determine nuestro máximo Tribunal". Pienso que quizá aquí haya algún planteamiento sobre personalidad de quienes están participando en ello, yo preguntaría si a este planteamiento que se hizo el nueve de agosto de dos mil dos, recayó algún pronunciamiento por parte de la Suprema Corte, o esto de alguna manera ha quedado para la decisión del asunto.

Señor Ministro Díaz Romero, ¿alguien podría informarnos?

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Gracias. La cuestión de la personalidad que en este proyecto que tienen a la vista, que tiene más de seiscientos cincuenta y siete fojas de lado y lado, hemos estudiado el aspecto de personalidad, y se llega a la conclusión de que la parte quejosa –al menos así lo pongo- sí tiene la personalidad para acudir al juicio de amparo y para que se la reconozca dentro del incidente de inejecución.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pero no recuerdo señor Ministro si a esto recayó alguna decisión o pronunciamiento de la Corte.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Permítame usted.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Esto está en la página doscientas ochenta y cuatro.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Doscientos ochenta y cuatro.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En la transcripción a la que dio lectura en parte el señor Ministro Ortiz Mayagoitia, y el señor Secretario si puede localizar ese documento y ahí seguramente pues aparecerá que acuerdo se dictó al respecto.

Dice oficio de nueve de agosto de dos mil dos, porque ahí dice en base a diversas cuestiones jurídicas, lo que me interesaría saber qué cuestiones jurídicas se plantearon ahí. Yo inferí que podría ser una cuestión de personalidad, pero probablemente sea el examen de ese documento, pues a mí me aclararía algunos de los planteamientos que hizo el señor Ministro Ortiz Mayagoitia.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Valls.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Está en la foja doscientos ochenta y siete, el acuerdo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Pero éste es de un Juez de Distrito.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Pero él resolvió ¿no? Está entregando el dinero.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, es el acuerdo que recae al documento que presenta el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría; yo me refiero a un documento al que se alude en él que es oficio de nueve de agosto de dos mil dos, que se presentó a la Suprema Corte.

Pero en fin, creo que podemos seguir con el debate sobre el asunto.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Díaz Romero.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Encuentro una constancia que este señor Juez de Distrito, es un acuerdo que cuya parte fundamental, está en la página trescientos trece, esta cuestión de la personalidad, tuvo que ver íntimamente relacionado con el cobro de algunos abonos que había hecho la Secretaría de la Reforma Agraria, se establecía si tenía personalidad y derecho a cobrarlo quien se presentaba; en la página 313, subrayo una parte en donde el Juez de Distrito dice lo siguiente: Ahora bien, de conformidad con las constancias relacionadas que anteceden, y toda vez que de los mismos se advierte que Gabriel Ramos Millán Fernández, tiene el carácter de albacea de la sucesión interlocutoria a bienes de Gabriel Ramos Millán, y que actualmente continúa con el nombramiento de albacea, sin que se le haya revocado manifestación expresa que hace bajo protesta de decir verdad, lo cual se corrobora con la constancia de veintitrés de mayo del presente año, suscrita por el Licenciado Miguel Alessio Robles, número tal; por otro lado, como está ordenado en la resolución del primero de marzo de dos mil, en el sentido de pagar el monto de la indemnización por partes iguales al albacea de la sucesión de Gabriel Ramos Millán, que acredite el cargo mediante documento idóneo a la fecha de ejecución del fallo y al representante legal de Armando Bernal Estrada, reconocido en autos, o a quien acredite legalmente ser el albacea de la sucesión de este quejoso en la fecha de ejecución de la sentencia, en esas condiciones, se pone a disposición del señor Gabriel Ramos Millán Fernández, como albacea a bienes de Gabriel Ramos

Millán, en billete de depósito número tal, por diez millones de pesos, expedido por el Banco de Ahorro Nacional, etcétera.

Aquí pues, se le está reconociendo como representante del albaceazgo al Licenciado Gabriel Ramos Millán Fernández, se sigue estudiando el problema y concluimos más adelante, siendo este asunto tan complejo, se presta mucho a confusión.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Bien, no insistiría, pienso que habría que ver con mayor cuidado lo relacionado con ese documento que dicen haber presentado ante la Corte y que a mí me crea la incógnita y qué fue lo que dijo la Corte en relación con este problema; por otro lado, no hay que perder de vista que eran dos sucesiones con diferentes representantes, pero en fin, pienso que esto en su momento podría aclararse y a mí me ayudaría a superar este problema.

Continúa el proyecto a consideración, señor Ministro Valls, tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente.

El proyecto es impecable, el estudio que hace el señor Ministro Díaz Romero, muy apegado a la técnica, muy cuidadoso como él hace siempre sus cosas, a mí el proyecto sin embargo, desde el principio me ha generado dudas porque la resolución está en vías de ejecución, como lo ha señalado el señor Ministro Ortiz Mayagoitia, si hubo pago, si fue aceptado el pago, así sea parcial, si no se objetó en tiempo, no se hizo valer ningún recurso sobre el particular, en fin, para mí siempre ha estado en duda que realmente tenga materia el incidente de inejecución.

Ahora bien, con relación a lo último que ha dado cuenta la Secretaría del oficio, de los oficios, escritos de estas personas presentados el día de hoy, el camino que ha señalado el señor Ministro Ortiz Mayagoitia, a ratificar su firma, pues dejaría sin materia a mi juicio este asunto, porque ya se estaría dando por cumplida, así sea un cumplimiento diferido, pero convenido, aceptado por ellos. De tal manera que yo me apego al punto de vista del señor Ministro Ortiz Mayagoitia.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro Díaz Romero.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Gracias señor Presidente.

Es cierto, como se dice, que hay jurisprudencia en el sentido de que se puede dar por cumplida la ejecutoria y dejar el incidente sin materia, cuando existe un convenio al respecto, quiero decir que aquí no hay convenio, aunque vengán a ratificar el escrito, de todas maneras no aparece el convenio, estos pagos parciales que está haciendo la Secretaría de la Reforma Agraria anualmente, no significa el cumplimiento, sino lo que se está dando a entender, es, yo no estoy incurriendo en responsabilidad, estoy haciendo lo que puedo, estoy pagando conforme a mis posibilidades presupuestales, pero en ningún momento ha convenido con el quejoso; el quejoso, por el contrario, en el momento en que se origina el problema, como lo acaba de leer el señor Ministro Don Guillermo Ortiz Mayagoitia, dijo no, yo quiero todo y en una exhibición. En concordancia con ellos, el Tribunal Colegiado de Circuito dice lo siguiente, en la página 237, de la mitad para abajo: "por tanto, -dice- el núcleo esencial de la prestación a la cual están obligadas las autoridades para dar cumplimiento a la ejecutoria por la vía substituta, se reduce a lo siguiente: pagar a los quejosos la cantidad de mil doscientos catorce millones, ciento setenta y cuatro mil cuarenta pesos, lo anterior es así

porque la Secretaría de la Reforma Agraria, una vez realizadas las investigaciones pertinentes, con base en los elementos técnicos remitidos, determinó de manera categórica la no existencia de predios afectados...”, y en el mismo sentido sigue diciendo, y esto es tomando en consideración, obviamente, lo que dijo el quejoso en este momento, ahorita en este momento dice, ya que estamos dictando la sentencia, o viendo el proyecto correspondiente, tómenmelo como si fuera un convenio, de ninguna manera es un convenio, creo yo, dice el Tribunal Colegiado, “en consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y el pago de los daños y perjuicios como cumplimiento sustituto de aquéllas, no está condicionado a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal correspondiente, con fundamento en el artículo 105, remítase a la Suprema Corte de Justicia...”, lo que debe hacer la Suprema Corte, creo yo, en este caso tan importante, tan trascendente, es determinar si efectivamente es correcto lo que se determinó por el Juez de Distrito y confirmó el Tribunal Colegiado de Circuito.

Quisiera yo agregar a esto, lo siguiente, vean ustedes por favor la página 524, aquí en esta parte hago el estudio de lo que representa el pago de \$ 1214 millones para la economía correspondiente a un país como México, digo en la página 524, “la resolución de daños y perjuicios de fecha primero de marzo, engrosada el día siete siguiente, emitida por el entonces Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, en el juicio de amparo indirecto tal, fue ejecutable a partir del diez de septiembre de dos mil uno, en que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró infundado el Recurso de Queja número 343. En el artículo –sigo en la página 525- en el artículo 3, fracción IV, Ramos Administrativos, rubro 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año dos mil uno, se le asignó a la Secretaría de la Reforma Agraria, un gasto programable de mil ochocientos cincuenta y cinco

millones; de este caudal, el monto original de la resolución de daños y perjuicios que se está reclamando aquí, equivale al sesenta y cinco punto cuarenta y cinco por ciento de dicho presupuesto; si se toma en cuenta que a la fecha en que se hizo exigible la obligación, septiembre de dos mil uno, ya estaba demasiado avanzado el ejercicio fiscal, es entendible que la autoridad no tuviera los fondos suficientes en ese momento, para efectuar el pago. En esta misma línea, en el Anexo 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dos, en el Apartado B, Ramos Administrativos, rubro 15, se asignó a la Secretaría de la Reforma Agraria un gasto programable de dos mil doscientos doce millones, de los cuales la cuantía original de los daños y perjuicios corresponde al cincuenta y cuatro punto ochenta y siete por ciento. En el Anexo 1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil tres, Ramos Administrativos, rubro 15, se previó como gasto programable de la Secretaría de la Reforma Agraria, la cantidad de dos mil setecientos cincuenta y ocho millones, con relación a esta programación anual respecto de la Secretaría de Estado involucrada en el cumplimiento, la cantidad original por concepto de daños y perjuicios correspondería al cuarenta y uno por ciento de dicho presupuesto, que es un poco menos de la mitad de la asignación con que contó la dependencia para ese ejercicio fiscal.

Finalmente, en el Anexo Gasto Neto Total del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil cuatro, en el Apartado B, Ramos Administrativos, rubro 15, se asignó a la Secretaría de la Reforma Agraria un gasto programable de dos mil ochocientos seis millones, de esta cantidad el cuarenta y tres por ciento equivale al pago de daños y perjuicios de trescientos treinta y tres hectáreas.

Pero, sigo diciendo en la página 257: Como se aprecia de esta relación, la cuantía de los daños y perjuicios ha representado una parte considerable del presupuesto que se ha dotado a la Secretaría de la Reforma Agraria, en cada uno de esos años; el cual se le ha asignado, no sólo para consecución de sus fines y el desarrollo de las actividades que le son propias, sino también para el sostenimiento de su estructura orgánica y funcional, pago de sueldos y demás prestaciones al personal que la conforma, cumplimiento de programas sociales y metas institucionales; de modo que no le sería factible realizar tan desproporcionado pago; y yo diría: ni en junto ni programado a tantos más cuantos años, pagando treinta millones de pesos anuales.

Estas atribuciones legales –digo en la página 529- son tan importantes para la clase campesina y, por ende, para la estabilidad del país, que el listado acabado de reproducir es encabezado por la facultad de la Secretaría de la Reforma Agraria para aplicar, en lo atinente, una disposición fundamental como es el artículo 27 de la Constitución Federal de la República.

Para mí, creo que la cantidad que se está determinando dentro del procedimiento de inejecución y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultad para examinar, no es el pago adecuado, no es el pago correcto, como lo estoy manifestando adelante.

Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Cossío, y, posteriormente el señor Ministro Aguirre Anguiano.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias, señor Presidente.

Creo que el problema que nos ha planteado el Ministro Ortiz Mayagoitia, es sumamente relevante y está a partir de estos dos escritos con los que se dio cuenta hoy en la mañana.

El problema que a mí me plantea su intervención, es el siguiente; y creo que ese es el centro de su reflexión: El incidente de inejecución éste y cualquiera que tengamos frente a nosotros, es un incidente de libre disposición de las partes o es un incidente que en algún momento de su presencia en este Tribunal se constituye en un estudio de carácter oficioso.

Las manifestaciones que hace el señor Ministro Ortiz Mayagoitia y los precedentes que él plantea, evidentemente están encaminados a decir que son de disposición de las partes; de manera tal que, si como en este caso se presenta un escrito, eso podría hacer valer las veces de un desistimiento, pues, del incidente mismo y dejarlo sin materia una vez ratificadas las firmas.

Sin embargo, con las tesis que se aprobaron por este Pleno en marzo del año pasado, en los asuntos del señor Beraza, a mí me parece que la forma de sustentar el criterio de análisis económico o de otros aspectos para garantizar el adecuado cumplimiento de ciertas etapas procesales y de ciertos elementos, todos ellos relacionados estrictamente con la ejecución, porque al menos la decisión mayoritaria, por el momento, la no revisar situaciones de “cosa juzgada”, me parece que le dan a esta Suprema Corte de Justicia, una facultad de revisión de carácter oficioso para, insisto, analizar determinado tipo de cuestiones; y ahí es a donde a mí se me presenta un problema: ¿hasta dónde existe –lo vuelvo a plantear con las mismas palabras- una posibilidad de libre disposición del incidente por las partes afectadas en juicio, y hasta dónde esta Suprema Corte, en

su carácter de Tribunal Constitucional inicia una revisión detallada de esas condiciones que ya no le son disponibles a las partes mismas?; y éste me parece que es –al menos así yo me represento el problema- el tema central que nos está llevando en este asunto.

Por supuesto, y se ha dicho en varias ocasiones hemos estado avanzando en la forma como debemos tratar estos problemas tan delicados del incumplimiento de las sentencias en el país, a nadie de nosotros nos es desconocido los muchos problemas que existen en esta materia y la forma –yo creo que muy prudente- en la que se ha ido –sin por supuesto debilitar a la técnica jurídica-, sí avanzando en la consideración de estas cuestiones.

Yo pienso, que si bien es cierto que hay derechos de las partes que están siendo, y que fueron contenidos en este caso, en un juicio de amparo, precisamente el carácter revisor que tiene esta Suprema Corte, le permite que en ciertas etapas del proceso, o agotadas ciertas etapas del proceso, pueda revisar oficiosamente las consideraciones de un incidente de inejecución y por ende, creo –y lo digo esto con mucho cuidado porque es un tema altamente debatido y complejo-, que, en ese momento ya no existe esta libre disposición de las partes; esto me parece que es lo que sustenta el sentido de la fracción XVI, del 107; y por ende, así como en la sesión anterior me pareció que no teníamos la posibilidad de estar modificando sentencias ejecutoriadas, me parece ahora que sí tenemos la posibilidad por vía de ejecución de revisar cuáles son los alcances de estos elementos, e insisto, creo que esto no es una cuestión de libre disposición de las partes.

Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Aguirre Anguiano, tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias, señor Presidente.

Yo pienso que estamos ante derechos “absolutamente disponibles” y no me preocupa en absoluto si existe convenio o no; lo que me preocupa es que la voluntad auténtica de las quejas en este negocio, esté debidamente recabada.

¿Por qué digo que creo que son derechos “absolutamente disponibles”? por lo siguiente: Se dice, y, pienso que con razón, que las garantías individuales no pueden ni deben ser objeto de tráfico, no deben entrar jamás en el “toma y daca”; pero si estas garantías individuales se refieren a derechos patrimoniales, esos derechos patrimoniales son disponibles ¿Y qué pasa cuando se concedió un amparo?. Que las garantías ya se efectivaron y que esto no le quita, desde luego, la disponibilidad al derecho patrimonial y voy a utilizar argumentos de refuerzo, el cumplimiento de las resoluciones de amparo típico y por excelencia, es reponer al quejoso en el goce de sus garantías violadas; la Constitución y la ley nos dan instrumentos sucedáneos para aquello, pero no son la restitución en el goce de las garantías individuales al quejoso, es el sucedáneo y el sucedáneo es típicamente continente y tiene el contenido de derechos patrimoniales. Por qué no van a ser disponibles, por qué no van a seguirse en su exageración mayor las reglas del Código Civil Federal que en el Capítulo de Remisión de la deuda, nos señala el artículo 2209, cualquiera puede renunciar a su derecho en la máxima disposición patrimonial, atemperado y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. En este caso, me pregunto yo, ¿existirá prohibición de ley para disponer de los derechos patrimoniales que fueron objeto de tutela a través del juicio

de amparo y que fueron efectivados a través del mecanismo del juicio de amparo?. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Continúa el asunto. Señor Ministro Gudiño Pelayo tiene la palabra y enseguida el Ministro Ortiz Mayagoitia y luego el Ministro Silva Meza.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: Sí. Señor Presidente, en la misma línea del Ministro Aguirre Anguiano. Considero yo que es necesario hacer una serie de distinciones necesarias para clarificar el problema o más bien para expresar mi punto de vista.

Yo creo que debe distinguirse la ejecución de las sentencias, o sea su cumplimiento, sí es de orden público, pero los derechos patrimoniales que derivan de ese cumplimiento sí son disponibles y precisamente por el fundamento que el Ministro Aguirre acaba de leer. Por lo tanto, cuando se habla de la oficiosidad, no puede haber oficiosidad en contra de la voluntad expresa de quien accionó el recurso de quien es el quejoso de quien va a ser el beneficiario, la oficiosidad simplemente va complementando la voluntad del beneficiario pero no en su contra y si en este caso ya se manifestó expresamente la voluntad del beneficiario, faltando solamente recabar la formalidad de la ratificación que por otra parte es esencial, pues yo creo que este Tribunal Constitucional debe respetar esa voluntad. Gracias señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Ortiz Mayagoitia.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Gracias señor Presidente. Decía Don José Ramón Cossío hace un momento, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultad para revisar de oficio el procedimiento de ejecución de una sentencia. Yo no creo que sea tan de

oficio, tiene que haber una decisión judicial del juez de distrito en la que dice: no se ha cumplido con la sentencia para que el asunto pueda venir a la Corte, mientras no haya este requisito no podemos atraer incidentes de inejecución o revisar de oficio lo actuado por jueces y magistrados, es un procedimiento debidamente reglado en la Ley de Amparo, nos llenaríamos si admitimos que hay revisión de oficio de los procedimientos de ejecución de sentencias; bajo esta premisa ¿qué hubiera pasado si al juez de distrito se le dice: Estoy conforme con la propuesta que hace la Secretaría de la Reforma Agraria en la forma de pago, pues el asunto jamás llega a esta Suprema Corte, ahí el juez admite y sigue los pagos.

La preocupación del señor Ministro Díaz Romero, tenemos un deber fundamental de analizar si la autoridad incurrió o no en incumplimiento, porque de aquí va a derivar un probable o un posible o pudo derivar un posible proceso penal, pudo, pero si hay ya una aceptación de la forma en que ésta propone cumplir, ya no derivará. Cuál sería el criterio del señor Ministro Díaz Romero si en su proyecto estuviera determinando que efectivamente hubo incumplimiento y que merece aplicarse la fracción XVI, del artículo 107 constitucional, no se lo preguntamos, porque ya lo conocemos; en otro interesantísimo proyecto de él, que tenía que ver con el Delegado de la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal; ahí el señor Ministro proponía la destitución y consignación del delegado, en el proyecto al estarse celebrando la sesión se recibió el billete de depósito con el cual se dio cumplimiento a la sentencia y qué dijimos: ya está cumplida, ahí no insistimos en investigar si había o no incumplimiento a la sentencia y no lo hicimos, porque nuestro interés fundamental es que las sentencias de amparo se cumplan, no somos órganos de investigación de la Comisión de Delitos; esto se hace de manera muy excepcional, entonces yo siento que la inclinación particular del señor Ministro Díaz Romero, obedece a los términos en que viene presentado su proyecto,

como adquirió la convicción que nos transmite, de que el incumplimiento que acepta es justificado, él dice: no hay responsabilidad penal, pero si estuviera diciendo lo contrario, como lo dijo en Iztapalapa, el cumplimiento por parte de la autoridad, no tuvimos ningún contratiempo para declarar que se había cumplido la sentencia e hicimos caso omiso de esa responsabilidad penal.

En otro aspecto, me pregunto yo, da lo mismo una expropiación al margen de la ley inconstitucional, violatoria de garantías, que aquélla otra que se ha hecho siguiendo todos los cauces legales del procedimiento, porque cuando la expropiación tiene apego constitucional, la indemnización se debe pagar en los términos que establece el decreto, pero de qué me sirve un amparo, si me dicen: el decreto es inconstitucional, ¡ah! pero para la cuantificación del valor de tu predio, me voy a basar en ese inconstitucional decreto. No, la ejecución sucedánea y en esto se insistió mucho en su origen en el año ochenta, se dijo: tiene un real sentido indemnizatorio, no es un medio de confirmación de expropiaciones ilegales para que el quejoso reciba la indemnización, que ya de suyo le daba el decreto. Aquí la modalidad es que no se la daba originalmente a quien resultó propietario, sino a un tercero que es del Ejido de Santa Úrsula, pero, finalmente, habiendo ya reconocido que el decreto es inconstitucional, yo no estoy muy de acuerdo en que ahora nos basemos en ese inconstitucional documento para cuantificar ex officio, como peritos en economía, el valor del predio expropiado. Es decir, si vamos a caminar al contenido del proyecto, creo que debemos hacerlo, si es el caso, y lo afrontaremos, pero no está muy clara para mí la solución que se propone. Apunto, no es lo mismo una expropiación correcta, que debe cumplirse en los términos del decreto, que una expropiación que ya ha sido declarada inconstitucional y que da derecho a una indemnización, en términos diferentes, a lo señalado en el decreto.

Se invocó como precedente de este asunto por el señor Ministro José Ramón Cossío, otro caso, que el quejoso dio el apellido Verástegui, pero aquel caso fue distinto, aquél quejoso consintió la expropiación y ese decreto expropiatorio bien determinaba algunos hechos que tuvimos en cuenta para después cuantificarlo; pasaron cinco años, en fin no se aplicó, el fin para que fue expropiado, pidió la reversión y obtuvo amparo para el efecto de obligar a la autoridad a revertirle el predio, aquél acto ilegal de la autoridad era no otorgarle la reversión solicitada, esto es distinto al caso, en que lo que se ha declarado inconstitucional es el Decreto Expropiatorio. Dice el señor Ministro Díaz Romero, no podemos hablar aquí de convenios, tiene razón en lo formal; cuando este asunto llegó a la Suprema Corte qué había una propuesta de pagos parciales a cuarenta años de distancia, que hace la autoridad responsable y el rechazo de esta proposición por la parte quejosa, más la impugnación de incumplimiento, es la quejosa la que dice no se cumple con la sentencia, obviamente, en este estado de cosas, no había convenio y por eso es que el asunto vino a la Corte, esta situación jurídica ha cambiado, ¿cuál es la situación jurídica actual y que podemos definir mediante la ratificación del escrito, que subsiste la propuesta de pagos, no sólo la propuesta sino el cumplimiento de la parcialidad que corresponde a este año y el cambio de actitud de la parte quejosa, la aceptación expresa de los términos en que la autoridad ha resuelto que le puede pagar por cierto, sin afectar grandemente su presupuesto, porque en el proyecto se nos dice que la cantidad de treinta millones equivale al 1.65% del presupuesto de la Secretaría de la Reforma Agraria, y al haber esta aceptación expresa de la quejosa, para mí es un convenio, en cuanto a que se ha dado un acuerdo de voluntades, con intereses distintos para ponerle fin a un problema entre ellos. Es cierto, no hay un documento que se llame “convenio mediante el cual la Secretaría y fulanito determina...” pero como dice el señor Ministro

Aguirre Anguiano, para que exigir —ni siquiera pensemos en el convenio—, lo que dije en mi promoción, que dio lugar a que el juicio viniera para acá, de que no estaba yo de acuerdo en que se me paguen anualidades de treinta millones de pesos por un lapso de cuarenta años, ya cambié de parecer, ya estoy de acuerdo, lo admito así, y por lo tanto, en esa forma me doy por satisfecho con el cumplimiento de la sentencia de amparo; sigo viendo que de ratificarse ese escrito estamos en un Incidente de Inejecución sin materia; completo esta exposición con la construcción, tan importante, tan cuidadosa y que se ve que costó mucho trabajo la elaboración del proyecto; en el caso del Delegado de Iztapalapa dijimos “mantengamos el proyecto del ponente tal como está agregando un considerando que es el resolutivo en realidad, que da cuenta que al estarse celebrando la sesión, se dio cuenta con tal...” Se tomó esta determinación, ese es mi punto de vista señor.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Silva Meza tiene la palabra y luego el señor Ministro Díaz Romero.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Gracias señor Presidente, declino la oportunidad, en tanto que coincido totalmente con el señor Ministro Ortiz Mayagoitia en sus expresiones.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Díaz Romero.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Gracias señor Presidente. Se dan varias razones por las cuales o mediante las cuales, podemos nosotros una vez ratificado el escrito correspondiente, llegar a la conclusión de que queda sin materia este asunto.

La intervención del señor Ministro Ortiz Mayagoitia, es muy interesante pero está a mi modo de ver, refiriéndose a unos y otros asuntos y como él mismo lo ha dicho, no todos son iguales, en el asunto de Iztapalapa,

efectivamente declaramos sin materia el asunto, el Incidente de Inejecución. ¿Por qué? Porque el Departamento del Distrito Federal o el Delegado exhibió la cantidad correspondiente, pero no vamos a comparar un lote, que creo que en aquella ocasión, era de catorce millones, con una obligación de pagar \$1214 millones no es lo mismo, no los podemos como el señor Ministro Ortiz Mayagoitia dice: poner en el mismo nivel, esto es de mucha mayor trascendencia. Dice también el señor Ministro Don Sergio Salvador Aguirre Anguiano: esta es una cuestión ya de derecho dispositivo. Yo puedo verificar o hacer con mi patrimonio, lo que yo quiera, renunciar a él o no renunciarlo, no es del todo exacto, cuando la fracción XVI del artículo 107 constitucional, originalmente establecido en 1917 como fracción XI, daba a la Suprema Corte de Justicia, facultades de cumplimiento muy rígido, esto cambió en 1994, con motivo de las reformas que sufrió el artículo 16, ya la Suprema Corte de Justicia, tiene facultades para examinar en cada caso, si se cumple o no se cumple con la ejecutoria, si es excusable o no es excusable; yo quiero pensar que en el momento –claro el señor Ministro Ortiz Mayagoitia- asoma un argumento en el sentido de que no está de acuerdo tampoco con lo que se presenta en el proyecto, seguramente él está de acuerdo con que se pague \$1214 millones yo no puedo aceptarlo, creo que la Suprema Corte de Justicia, con motivo de la apertura de facultades que dio el Constituyente en 1994, tiene perfectamente facultades para verificar lo correcto o incorrecto, ya no es de derechos dispositivos, es de orden público; quisiera yo pensar por un momento en que no son 1214 millones no, vamos a suponer que sean billones, porque puede ser también, y que la autoridad responsable de la misma manera diga: voy a pagar, anualmente la cantidad de \$100'000,000.00 durante cien años. Cómo va a aprobar la Suprema Corte ese aspecto, tiene que verlo porque es un poder en relación con otro, y yo creo que desde ese punto de vista, cuando se hace el estudio, y si quieren pues llegamos ahí, para verificar si efectivamente es correcto que terrenos

que fueron expropiados en 1984, se valúen con los valores que datan de 2003, eso no es correcto. Yo desde ese punto de vista, sostendré mi proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Aguirre Anguiano, tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Gracias. Son muy interesantes los temas que trata el señor Ministro Don Juan Díaz Romero, yo desgraciadamente por más esfuerzos que pueda hacer, no congeniaré con este punto de vista. Si vemos la responsabilidad indemnizatoria del Estado, esta es en proporción al daño, nunca es, en proporción al tamaño patrimonial de la entidad productora del daño, y aquí se nos está sosteniendo una tesis que a mí me parece, pues francamente inaceptable; la responsabilidad total del daño causado, debe de medirse en proporción a las posibilidades de la entidad estatal causante del daño. Yo esa tesis no la puedo aceptar jamás, yo prefiero la tesis de los cien años, que pague durante cien años, pero no podemos reducir el cumplimiento de las obligaciones resultantes de ilícitos, y por tanto, generadoras de el resarcimiento, en la medida de las posibilidades o del tamaño patrimonial de la entidad correspondiente.

Esto es algo que se contiene en el proyecto y que se nos repite en este momento, yo desde luego que manifiesto mi discordancia con la tesis de fondo que esto involucra, pero yo creo que estamos precipitando temas y enervándolos, cuando no hemos resuelto los primeros; si vamos a estar en la discusión de lleno, del proyecto, yo tendría cosas que decir respecto a las soluciones que se nos proponen, pero yo no he escuchado que ya estemos en situación de haber superado la decisión que debe recaer al escrito presentado por los quejosos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Yo creo que por el rumbo que ha tomado la discusión, lo pertinente es volver a la proposición original del Ministro Ortiz Mayagoitia, hay un documento, del que a través de la discusión, parece inferirse que puede existir la comprobación de un convenio quizás tácito, entre el quejoso y la autoridad, en torno al cumplimiento de la ejecutoria, pero para ello, pues se necesita que se acuerde, que se ratifique ese documento, para que podamos ver si lo que ha sido punto central de esta discusión, está sustentado jurídicamente con la ratificación de este documento.

Yo, simplemente en torno a este tema, me atrevería a apuntar lo siguiente, que fue materia de alguna discusión. Yo creo que evidentemente no hay un convenio expreso, en el que en forma ortodoxa se hayan reunido la autoridad responsable y los quejosos y finalmente hayan elaborado un documento que consigne su voluntad de que se cumpla la ejecutoria en determinado sentido; sin embargo, pienso que un análisis detenido de las constancias de autos, puede revelar cuál ha sido la intención de las autoridades en torno al cumplimiento de esta ejecutoria.

Por otro lado, no hay que perder de vista que estamos, como se ha dicho, en un asunto peculiar, en el que hubo una sentencia en que se determinó en uno de los puntos resolutiveos, el monto que podía considerarse como idóneo del cumplimiento sustituto, y que esto fue materia de un recurso de queja, y que un Tribunal Colegiado de Circuito, consideró que era infundado el recurso de queja promovido por la autoridad, esto pienso, que de algún modo tiene importancia.

Por otro lado, advierto que en el expediente hay distintos documentos en los que la autoridad responsable manifiesta aun a la Suprema Corte de Justicia, a través de la Segunda Sala, que está en vías de cumplimiento la

sentencia y parece ser que en ningún momento dice, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho la sentencia, sino más bien está señalando, no quiero desacatar la sentencia y en la imposibilidad de pagar en una sola exhibición el monto que se señaló, pues te manifiesto que pago en parcialidades y que he hecho el depósito correspondiente, entonces como que al principio parecería que sí hay una manifestación de voluntad de la autoridad, de cumplir con la sentencia en la forma como fue emitida, sería el caso como dice el señor Ministro Díaz Romero, de que, de todas maneras nosotros entremos al examen de si fue correcto el alcance que se quiso dar al cumplimiento sustituto de esta sentencia, en fin, problemas que seguramente tendremos que profundizar ya en el momento en que en su caso habiendo sido ratificado este documento, podamos continuar sobre bases ya muy firmes en estas consideraciones, de modo tal que yo me permito proponer que tomemos el acuerdo de solicitar que se ratifique este escrito y en ese momento se volverá a listar el asunto para que continuemos con el debate. Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Presidente. Por qué no tomamos un acuerdo que evidentemente tendría el carácter de preliminar y no vinculatorio en sentido si estamos de acuerdo o no de acuerdo con el proyecto, en este sentido nada más lo propongo, quienes estemos de acuerdo con el proyecto del Ministro Díaz Romero y yo lo estoy, creo que vamos a perder en las condiciones por lo que yo voy observando en la votación, entonces ya se sabe cual es el efecto de la ratificación, si se ratifica el escrito pues ya tendría un mandato hacía alguna de las Salas, para que quedara sin materia el correspondiente incidente de inejecución de sentencia y no tener que repetir esta misma discusión en algún otra vista del asunto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Aguirre tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO: Yo no creo que podamos votarlo sin discutirlo, no podemos manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo sin escuchar los argumentos de todos nosotros, no es que yo pretenda que yo pueda convencer a alguien, pero a lo mejor alguien me convence a mí, yo creo que sin discutirlo no podemos votar.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Silva Meza.

SEÑOR MINISTRO SILVA MEZA: Yo les transmito esta reflexión, coincido totalmente con el Ministro Aguirre Anguiano, en lo particular yo venía de acuerdo con el proyecto, pero frente a esta nueva situación, es otra cosa, en tanto que el proyecto está considerando una situación de incumplimiento, en virtud de que una de las partes no está de acuerdo, nosotros les comento a los compañeros de la Primera Sala, lo conocen, hemos tenido un asunto muy parecido, donde la condena era de ciento ochenta y tantos millones de pesos, el gobierno de la entidad federativa, dice, yo sí los voy a pagar, pero puedo pagar dieciocho millones mensuales y el quejoso dijo no, me dijeron ciento ochenta y dos, el gobierno consignó dieciocho millones el primer mes y el quejoso dijo no, todo, otros dieciocho, no, todo, otros dieciocho, no todo, entonces dijeron bueno, entonces sí, hay voluntad de pago, etcétera, etcétera y se siguió por la Sala, en consecuencia la situación cambió, totalmente cambió, ahora, porqué venía yo de acuerdo con el proyecto, no lo hemos discutido, pues por las mismas situaciones que iba en aplicación de una situación de justicia que es lo ha motivado variados criterios, no avalar decisiones que son inconsistentes, incongruentes, fuera de lógica, tocando a la cosa juzgada en el incidente de inejecución, lo hemos aceptado, aquí

si se puede, vamos en estas cuestiones en tanto que no podemos aceptar en la etapa de incumplimiento unas situaciones que atenten contra toda lógica, sean avalúos, etcétera, nosotros lo podemos hacer independientemente de que la sentencia ya está dictada, en ese sentido, vamos y con lo que ven en ese momento, parece que es congruente con los precedentes y con el estudio que se ha presentado, pero ahora esta nueva situación yo coincido varía totalmente las consideraciones.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Yo quisiera añadir que coincido con el señor Ministro Silva Meza, yo venía de acuerdo con el proyecto, pero se han producido situaciones derivadas de un documento que se presentó el día de hoy y que de suyo, planteó una nueva situación, podemos ante una manifestación de los quejosos el reabrir un problema de la inejecución de sentencia, no olvidemos que una de las razones que se establecieron en aquellos asuntos que advertimos que una reforma que se había introducido en el capítulo de ejecución de sentencias, era el relativo a si era excusable o no el incumplimiento de la sentencia, y que esto tenía una dimensión que el propio Ministro Díaz Romero destacó, la Suprema Corte se encuentra con un problema que no tuvieron que ver ni el juez de Distrito ni los Tribunales Colegiados de Circuito, que su pronunciamiento derivará en una consignación, en la determinación de que hay elementos para la Suprema Corte de Justicia que le permiten acudir al juez de Distrito y de algún modo señalar que pudo haber incurrido en el delito, —aquí hago la siguiente aclaración, con todo respeto—, de incumplimiento de una sentencia de amparo, equiparable en cuanto a la sanción que se imponga al delito de abuso de autoridad, en estos casos tenemos que proceder con extraordinaria cautela en la medida en que a la autoridad la vamos a consignar penalmente, entonces lo que implica privación de la libertad, tiene que ser rigurosamente señalado, y ahí es donde tenemos que ver si los efectos que se han dado para cumplir con la sentencia son

correctos o incorrectos, pero aquí estamos de pronto ante una situación en que el quejoso mismo está señalando “acepto que se está cumpliendo la sentencia y que se cumpla como la autoridad ha dicho”, y leyendo el documento por el que la autoridad manifestó cómo quería cumplir con la sentencia, que es lo que he tenido oportunidad de hacer a lo largo de la discusión, no encontré una sola línea en que la autoridad dijera: “condiciono esto a que posteriormente se analice si es correcto el monto señalado”, sino que prácticamente aceptó que lo que aparecía en la sentencia era correcto, por ello a mí sí me parece importante que todo esto se vea a la luz de un documento que puede ser o no ratificado y por ello creo que no sería oportuno votar, yo concretamente no estaría en aptitud de votar en la medida en que mis preocupaciones han surgido de un documento que no está ratificado, si no se ratifica, probablemente yo, reiteraré mi posición sobre el proyecto, obviamente sobre la base de que seguiré escuchando las razones que se den, pero aquí se estableció la discusión básicamente sobre la situación que en este momento se produjo con motivo de un documento que se presentó a las 8:30 de la mañana aproximadamente.

Señor Ministro Díaz Romero.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Muchas gracias señor Presidente, yo también creo que lo más prudente es que se aplace el asunto para verse dentro, --si se le dan--, los términos correspondientes que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, para que acudan a ratificar el documento que presentan hoy, y esto implicará obviamente, y lo cual yo le pido por favor, —señor Presidente—, instruya al señor Secretario, para que reparta a todos los señores Ministros una copia del escrito correspondiente, para que vayan haciéndose idea de lo que pide y qué efectos puede tener.

Por otro lado, yo solamente quiero agregar, tan importante, tan trascendente es que la Corte llegue a establecer que una autoridad responsable, ha incumplido con la ejecutoria de amparo, con todas las consecuencias que ella tenga, como importante también es ver los términos en que se va a cumplir la ejecutoria, estos términos tienen que ser como la Corte, verifique que sean adecuados, que sean correctos, que sean jurídicos, no más allá de lo que corresponde conforme a derecho. Claro, yo de acuerdo con lo que vengo proponiendo, de acuerdo con el avalúo que yo me permito proponer, pues es la cantidad de 199 millones, 199 millones que comparados con los 1214 millones, marcan una diferencia ¡tan grande!, que también es necesario poner en la balanza, así como se pone en la balanza la importancia que este se pueda llevar a juicio penal a la autoridad responsable y suspenderla en su puesto, importante es también que la Suprema Corte de Justicia como ¡última instancia! de este Incidente de Inejecución determine lo que es jurídico y lo que no es jurídico, porque si cerramos los ojos a ello, no estamos cumpliendo a mi modo de ver, con lo que nos corresponde de acuerdo con la Constitución, pero en fin, esto será materia de la próxima sesión.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Yo haría algunas breves reflexiones en torno a lo que se ha dicho:

Primero.- No perdamos de vista que de acuerdo con constancias de autos antes de este documento, si este documento no es ratificado pues a mí quizás no me sorprendería, por qué, pues porque lo que han sostenido los quejosos es que no están de acuerdo con esta forma de pago propuesta por la autoridad; entonces la ratificación también es para salvaguardar la situación de los quejosos, cuando tiene uno ya años en estos menesteres, uno ha tenido conocimiento de desistimientos que se presentan y que en la audiencia tienen que detenerse y se

pide la ratificación y no se ratifican, con lo que no queda la duda que algún tercero perjudicado haya presentado el desistimiento.

Bien, entonces cautela no solo en relación a la decisión que tomemos en torno a la inejecución.

Segundo.- Por qué en un momento dado, a mí me pesó la discusión, pues básicamente por un argumento que dio el Ministro Ortiz Mayagoitia. Imaginémonos todos los asuntos en que se dicta una sentencia de amparo, el juez está obligado a velar por su cumplimiento, requiere a la autoridad y la autoridad se presenta y dice: “vengo a ofrecerte que yo cumpliré con la sentencia de la siguiente manera: “, qué hace el juez, requiere a la parte quejosa y le dice, la autoridad me viene a decir que está en disposición de cumplir con la sentencia de esta manera y se presenta el quejoso, estoy de acuerdo; el juez simple y sencillamente dice: se tiene por cumplida la sentencia y ni siquiera nos vamos a enterar en la Suprema Corte de este tema; por qué porque como lo destacó el Ministro Ortiz Mayagoitia, hay solamente dos posibilidades de que la Corte conozca de estas situaciones; cuando oficiosamente el juez después de haber insistido en que se cumpla, de ir al superior jerárquico, etc., llega a la conclusión no se ha cumplido y lo remite a la Corte, claro, en su caso sí hubo intervención de Colegiados, lo harán los Tribunales Colegiados de Circuito; ésa es una forma y la otra es cuando el propio quejoso dice: oye, no se ha cumplido con la sentencia, mande el asunto a la Corte y entonces el juez tiene que actuar; los otros casos ya son Inconformidades que el juez dice se cumplió y el interesado dice, mira, se cumplió mal, vete a una Inconformidad, etc., etc., en lo que creo que hemos avanzado mucho en cuanto a criterios, en este caso dijo el Ministro Ortiz Mayagoitia, ahí fue donde de pronto todas las convicciones que yo traía sobre el proyecto se me

desbalancearon, qué hubiera sucedido si esto hubiera ocurrido cuando precisamente acudió la autoridad a decir que quería cumplir, no habríamos tenido conocimiento del asunto y esto se habría considerado cumplido.

Lo último que quería decir y que conecta con lo que hemos venido discutiendo a lo largo de estos asuntos, porque aquí se ha hablado mucho de que los derechos patrimoniales que tiene, no, sobre esto no se ha pronunciado el juicio de amparo; el juicio de amparo lo único que nos has dicho es que hay un decreto expropiatorio que se considera violatorio de la Constitución en relación con alguien que presentó elementos para estimar que tenía interés jurídico.

Ahora, que tenga derechos que nadie se los discuta, etc., eso ya dijimos no es materia del juicio de amparo, no hay un pronunciamiento del juicio de amparo que diga: estos señores son legítimos propietarios de las tierras, no hay nadie que les pueda disputar sus derechos, etc., etc.; en eso, no hay cosa juzgada, qué se juzga, pues lo obvio, aquello que fue controvertido sobre lo que hubo debate, pero todo lo demás, no hay cosa juzgada, de modo tal, que yo si también veo con reserva lo que se ha dicho que los derechos patrimoniales, pues derechos patrimoniales se seguirán de una sentencia que dice, debes cumplir de esta manera, es sobre la base de que tengas esos derechos patrimoniales, que por lo pronto, debe entenderse que los tienes, porque no hay ninguna decisión que lo esté desvirtuando, y la autoridad tiene que cumplir en relación con quién ha demostrado su interés jurídico; en fin, problemas interesantes que yo creo que a todos nos están ayudando a precisar estos conceptos, y a que nuestras decisiones estén más claramente resueltas con independencia, objetividad e imparcialidad. De manera tal, que si a ustedes les parece y consulto si en votación económica se aprueba, que se hagan las prevenciones a

quienes presentaron estos escritos, de que ratifiquen en el término señalado por el Código Federal de Procedimientos Civiles, este escrito, a fin de que podamos listar nuevamente este asunto y continuar con el debate.

Ministro Cossío está de acuerdo, después de lo que hemos dicho, de que no hay elementos por el momento para someter a votación el proyecto.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Sí, salvo a las alusiones a la falta de experiencia que pensaba que venían dirigidas a mí, eso no me gustaron mucho, porque me estaba yo refiriendo a otro tema, yo lo que decía es, si podríamos no tanto entrar a discutir sin la ratificación del escrito, sino si era suficiente el que se hubiere prestado este escrito, para eso, pero dejo el problema del lado; por lo demás, estoy muy de acuerdo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Y por su primer comentario, es lógico que cuando una persona tiene el atributo de la juventud, cuando se habla de falta experiencia piense que uno está aludiendo, pero el señor Ministro, bien lo sabemos y lo demuestra cotidianamente, tiene en capacidad y sabiduría lo que quizá rebasa mucho la edad que muchos le envidiamos.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias, muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Continúe dando cuenta, señor Secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Entonces, ¿este asunto queda aplazado?

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En votación económica, dije.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: El acuerdo es ¿qué se aplaza?

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, se aplaza.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: El acuerdo del Pleno, de que se vea si se ratifica o no.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Así es, se liste en el momento, o bien, se venza el plazo y no haya habido ratificación, o haya la ratificación, sin necesidad de tener que esperar que se venza el plazo.

ENTONCES QUE QUEDE ASENTADO ASÍ, EN VOTACIÓN ECONÓMICA. CONTINÚE DANDO CUENTA SEÑOR SECRETARIO.

(EN ESTE MOMENTO, SE INTEGRA AL SALÓN DE SESIONES LA SEÑORA MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS)

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

RECURSO DE RECLAMACIÓN NÚMERO 24/2005. INTERPUESTO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN CONTRA DEL AUTO DE 6 DE ENERO DE 2005, DICTADO POR EL MINISTRO INSTRUCTOR EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NÚMERO 109/2004, POR EL QUE SE DESECHÓ, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, EL CITADO INCIDENTE.

La ponencia es de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra, tiene la palabra.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Gracias señor Ministro Presidente, en primer lugar, quisiera yo pedirle señor Presidente, por su conducto, que el señor Secretario nos informara cuándo vence el plazo para que den respuesta el Ejecutivo Federal. En relación, a los recursos de reclamación del incidente de nulidad y actuaciones que fue desechado por el señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia; eso en primer lugar, y en segundo lugar, decirles que tengo un documento para repartir, pero primero, yo quisiera que me informara.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Por favor señor Secretario, dé el informe que solicita la Ministra.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Es el oficio recibido el catorce de enero, Licenciado Javier.

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA: En el acuerdo de diecisiete de enero se les da cinco días hábiles, ¿a ese plazo se refería señora Ministra?

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: ¡No! Al escrito recibido el catorce de enero de dos mil cinco, en donde el Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal de la Cámara de Diputados, interpuso Recurso de Reclamación en contra del auto de dieciséis de enero del dos mil cinco, dictado por el Ministro Instructor, mediante el cual se desechó por notoriamente improcedente el Incidente de Nulidad de Actuaciones planteado en la Controversia Constitucional 109/2004, es el escrito recibido el catorce de enero.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Así, es.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Y habría que ver cuando se notificó a quienes hicieron valer la controversia.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, a este escrito de catorce de enero, recayó un acuerdo el diecisiete de enero, en ese acuerdo se le dan cinco días hábiles, se le corre traslado a las partes para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surte efectos la notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga. La notificación, es de dieciocho de enero, o sea el plazo correspondiente transcurrió del veinte al veintiséis de enero.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Ayer se venció el plazo ¡Muchas gracias, señor Ministro Presidente!

En este caso, de todas maneras ya teníamos un escrito del Jefe de la Unidad de Controversias Constitucionales, en que se nos hace de nuestro conocimiento que el sábado veintidós de enero fueron presentados en el

domicilio de la Secretaría autorizada para recibir documentos, fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, el desahogo de la vista girada tanto al Poder Ejecutivo Federal, como al Procurador General de la República; ya tenemos los escritos de ambos, tanto del Procurador como del Consejero Jurídico; y en esa virtud, no sé si me permitan...

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Sánchez Cordero, si me permite. Si la notificación se hizo el día dieciocho, surte efectos el día hábil siguiente que es el diecinueve, jueves es veinte; viernes, veintiuno, lunes veinticuatro, martes veinticinco, miércoles veintiséis, serían los cinco días.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: ¿Cuándo?

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Hoy veintisiete, ya está vencido el plazo.

¡Bien! Continúa señora Ministra.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: ¡Muchas gracias señor Presidente!

Entonces si me permite señor Ministro Presidente, quisiera yo repartir unas notas.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Díaz Romero.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: En relación con el cómputo que se está haciendo, tengo entendido que según la información que nos dio el señor Secretario, fue notificado el dieciocho, surtió efectos el diecinueve, empieza a contar el veinte, jueves veinte uno, viernes veintiuno dos, lunes

veinticuatro tres, martes veinticinco cuatro, miércoles veintiséis cinco, entonces hoy, pues ya está vencido ¿no? así se cuenta ¿verdad?

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Bueno, muchas gracias señor Ministro Presidente, en esa virtud, quería yo y solicitaría que se cambiara el orden de la lista y que se viera primero el Recurso de Reclamación número 372/2004, que depende de lo que se diga en ese recurso, podríamos ver los siguientes recursos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Ortiz Mayagoitia tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO ORTIZ MAYAGOITIA: Hago notar solamente señor Presidente, que el Recurso de Reclamación 372/2004 y el que le sigue, fueron hechos valer ad cautelam dependiendo de lo que se decida en el incidente de nulidad, entonces, este cambio a la lista parece que no debe aprobarse.

SEÑORA MINISTRA SÁNCHEZ CORDERO: Porque están hechos ad cautelam, muy bien, entonces en el orden en que estaban listados.

Gracias Ministro.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En consecuencia, en el orden en que están listados, vuelva a dar cuenta con ellos, en tanto que únicamente hizo referencia a la identificación.

**SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:
Como no señor con mucho gusto.**

RECURSO DE RECLAMACIÓN NÚMERO 24/2005 INTEPUESTO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN CONTRA DEL AUTO DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL CINCO, DICTADO POR EL MINISTRO INSTRUCTOR EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NÚMERO 109/2004, POR EL QUE SE DESECHÓ POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, EL CITADO INCIDENTE.

La ponencia es de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas y en ella se propone:

PRIMERO.- ES PROCEDENTE PERO INFUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE RECLAMACIÓN.

SEGUNDO.- SE CONFIRMA EL ACUERDO RECURRIDO DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL CINCO, DICTADO EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PLANTEADO EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2004.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A consideración del Pleno este proyecto.

Señor Ministro Góngora Pimentel tiene la palabra.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Gracias señor Presidente, tanto en el 24/2005, como en el 23/2005, son Recursos de Reclamación derivados de la Controversia Constitucional 109/2004, Recurrente: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En los proyectos, se propone confirmar los autos recurridos, propuesta que no comparto, por lo que procederé a exponer mis diferencias con lo planteado en dichos documentos; se sostiene que deben confirmarse los autos del Ministro Instructor, pues en el sistema jurídico mexicano no existe la posibilidad de

impugnar los acuerdos generales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no es un órgano terminal, pues ello implicaría el reconocimiento de la existencia de una autoridad jurisdiccional por encima de la Suprema Corte. Además, se agrega, no puede haber un medio de control constitucional sobre las decisiones tomadas en otro medio de control constitucional y por otra parte, no existe posibilidad de que a petición de las partes el propio tribunal pueda revisar la constitucionalidad de sus resoluciones.

En contra de los anteriores argumentos, considero que el incidente de nulidad de actuaciones, si es la vía idónea para realizar la impugnación de las actuaciones realizadas por los Ministros de la Comisión de Receso, en específico desde el acuerdo de turno, porque el mismo es procedente en contra de aquellos actos del juicio que en atención a su especial naturaleza pueden provocar la nulidad del procedimiento cuando el mismo se desarrolla en forma distinta a lo previsto por la ley.

Se me había olvidado señor Presidente que traigo copias de esto para los señores Ministros.

A ver, por favor si permite el señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí como no, por favor que las distribuya.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Gracias.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: ¿En qué página vamos?

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: En la primera. Acabamos de leer la primera.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Continúo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Por favor señor Ministro Góngora.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Este supuesto jurídico de que hablábamos, de la Comisión de Receso, es completamente distinto al del Recurso de Reclamación que procede de acuerdo a lo regulado en la fracción I del Artículo 51 de la Ley Reglamentaria, en contra de los autos o resoluciones que admitan o desechen la demanda, su contestación o las ampliaciones. Sin embargo, la materia del recurso es analizar precisamente la legalidad del auto admisorio en cuanto a su contenido y no puede abarcar el acuerdo de turno o bien el análisis de las facultades del Ministro Instructor. En cambio, la nulidad de actuaciones es un remedio procesal mediante el cual las partes pueden impugnar mediante la vía incidental, actuaciones judiciales que estiman contrarias a las normas que rigen un procedimiento –vamos en la segunda página, en el segundo párrafo–

SEÑOR MINISTRO VALLS HERNANDEZ: Si muchas gracias señor ministro.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: . . . normas las cuales aun cuando no ponen obstáculo al curso del juicio deben plantearse y resolverse antes de que se emita sentencia; mediante este incidente cualquiera actuación judicial puede ser revocada o modificada cuando exista una violación trascendental en el procedimiento cuya corrección legal proceda; ciertamente la posibilidad de promover el Incidente de

Nulidad de Actuaciones, es connatural a todo proceso, en tanto que pueden existir actuaciones que no se apeguen a las formalidades del procedimiento y además, debe resolverse como de especial pronunciamiento. Como indica Germán Baltazar Robles, en su libro “Controversia Constitucional y Acción de Inconstitucionalidad”; dice lo siguiente: –lo cito– “Incidente de Nulidad de Actuaciones, este incidente no está previsto expresamente como de especial pronunciamiento en la Ley Reglamentaria, dado que sólo se maneja el de nulidad de notificaciones; sin embargo, consideramos que a pesar de ello debe considerarse que las disposiciones previstas para la nulidad de este tipo especial de actuaciones, notificaciones, deben extenderse a todos los casos en que se reclame la nulidad de cualquier actuación en general; por lo que, deberá tramitarse el incidente conforme a las reglas ya comentadas y el Ministro Instructor deberá pronunciar la interlocutoria respectiva que será impugnada ante el Pleno o Sala de nuestro Máximo Tribunal. Cabe aquí, –continúa el autor, precisar que el incidente de nulidad no es un recurso, en virtud del cual las partes pueden controvertir el sentido de las resoluciones judiciales, sino un medio de defensa contra las actuaciones que se realizan faltando a las formalidades esenciales que por ley deben respetarse.” Hasta aquí la transcripción del autor.

Resulta oportuno citar que la Tercera Sala de la Suprema Corte, al resolver el treinta de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, el Amparo Civil Directo promovido por Ezequiel Pérez, sostuvo que las nulidades de procedimiento, según todos los tratadistas, tienden fundamentalmente a garantizar las formalidades esenciales del juicio y constituyen la mayor sanción para el debido respeto de las normas procesales, independientemente de otras sanciones, como las multas, las responsabilidades de los funcionarios, etc; en este tenor, toda vez que en el presente asunto se impugnan las facultades de los Ministros de la

Comisión de Receso desde el inicio del procedimiento, resulta procedente el incidente de nulidad de actuaciones, pues se está alegando una violación a una formalidad al procedimiento, al haberse realizado actuaciones en el período de receso, lo cual, de ser fundado, provocaría que se anulara todo lo actuado en el proceso, ahora bien, siendo la vía idónea el incidente de nulidad de actuaciones para combatir las actuaciones de los Ministros de la Comisión de Receso, debe ser materia de estudio el análisis de la legalidad el Acuerdo General 12/2004, del Tribunal Pleno, que otorga facultades a las Comisiones de Receso para proveer los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales, pues aun cuando algunos de los argumentos expuestos por la parte que lo promueve, se dirigen al combate de la constitucionalidad de dicho acuerdo, no puede pasar inadvertido que el núcleo esencial de la argumentación, reside en el cuestionamiento de las facultades de la Comisión de Receso, en atención a la violación del artículo 14 fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se aduce que la Comisión de Receso carece de facultades para proveer respecto de trámites jurisdiccionales urgentes, debido a que dicho precepto sólo se las otorga respecto de trámites administrativos, en última instancia, lo que se está cuestionando son las actuaciones de la Comisión de Receso, en específico, la legalidad de sus facultades para haber realizado actos jurisdiccionales de trámite, en efecto, el argumento de inconstitucionalidad gira en torno a la ilegalidad de las actuaciones de la Comisión de Receso, al cuestionarse las actuaciones de la misma, por considerar que son violatorias de la fracción XVIII, del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que si bien nos lleva indirectamente al análisis del Acuerdo General 12/2004, ello se justifica, porque de lo contrario se dejaría a las partes en un estado total de indefensión al no dar respuesta a su impugnación, debemos tomar en cuenta el criterio vertido en la tesis aislada del Tribunal Pleno, que dice, leo el rubro:

“AGRAVIOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, DEBEN ATENDERSE CUANDO SUSTENTAN TAL AFIRMACIÓN EN LA INEXACTA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES APLICADAS”.

En término de lo establecido en la jurisprudencia 2/97, el Tribunal Pleno tiene la siguiente:

“AGRAVIOS INOPERANTES, LOS SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES”..., solamente en ese aspecto. **“...DEBEN DESESTIMARSE POR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ADUCIDOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO, EN LOS QUE SE AFIRMA QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN EN PERJUICIO DE LOS QUEJOSOS GARANTÍAS INDIVIDUALES; TODA VEZ QUE ESTE RECURSO NO ES UN MEDIO DE CONTROL AUTÓNOMO, SINO QUE ES UN PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA, SIN EL EFECTO DE EJERCER UN CONTROL CONSTITUCIONAL, SIN SOBRE OTRO CONTROL CONSTITUCIONAL”.** Y luego agrega la Corte: **“LO QUE NO IMPIDE, ATENDER LAS ARGUMENTACIONES RELATIVAS, SI SE ADVIERTE QUE LOS AGRAVIOS SE HACEN DEPENDER DE LA INEXACTA APLICACIÓN DE LAS LEYES APLICABLES, ASPECTO QUE ATAÑE AL ÓPTIMO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL REGULADA EN PRECEPTOS ESPECÍFICOS DE LA LEY DE AMPARO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”.** Hasta ahí la tesis.

Ciertamente, resulta inexacto el desechamiento de plano del Incidente de Nulidad de Actuaciones, argumentando que se impugna la inconstitucionalidad del acuerdo, cuando en el fondo de dicha argumentación también subyace una impugnación de la legalidad de los actos de los Ministros de la Comisión de Receso; además, el estudio respectivo no conlleva a un análisis de la inconstitucionalidad de una ley, sino de un acuerdo general del Tribunal Pleno que no puede ser equiparado a la ley, pues el mismo debe ser reglamentario de la misma y, además, al ser revisado por la propia Corte, tampoco se nos estaría sometiendo a una jurisdicción superior, como se afirma en el proyecto, razón por la cual, debe procederse plenamente a su análisis a través del Incidente de Nulidad de Actuaciones.

El proyecto tiene dos partes, una en donde se estudia si es procedente o no; y otra, en donde se trata de convalidar con muchos argumentos todo lo relativo al acuerdo 12/2004, por eso lo estoy separando en esta parte,

todo esto ha sido respecto de si es procedente o no el incidente, yo creo que sí, ahora me voy a dedicar a la fundamentación y motivación.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: Señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: Una moción.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí, señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: No sé si le parezca al Ministro Góngora, si primero discutimos el primer punto y después ya resuelto el primer punto entramos al análisis del segundo, es una propuesta.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Góngora.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: No fue una propuesta, a mí me parece que si dejamos fuera esta parte, en donde se trata de convalidar el acuerdo 12/2004, no estaríamos dándole una respuesta a los promoventes.

SEÑOR MINISTRO GUDIÑO PELAYO: Señor Presidente, creo que no me expliqué bien, yo lo que digo es que primero se discuta éste y sobre la resolución que se lleve en éste, porque son cuatro incidentes, cuatro recursos, cada uno de los recursos con mucha problemática, por supuesto que yo no me manifiesto en contra de que no se le dé una respuesta adecuada, es más, yo con la primera parte del Ministro estoy de acuerdo,

por eso me gustaría que se discutiera esta primera y después de esta primera viéramos la segunda.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Señor Presidente, faltando seis minutos, por qué no dejamos esto para la próxima sesión.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: El planteamiento del señor Ministro Góngora parece de algún modo solucionar la moción que ha hecho el señor Ministro Gudiño, que más que moción pienso que era una sugerencia en cuanto a establecer el método de la discusión, pienso que efectivamente faltando unos minutos, es previsible que ya no pudiéramos ni siquiera entrar al debate de alguno de los puntos que se han planteado, en consecuencia, consulto si están de acuerdo en que levantemos la sesión.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Estamos de acuerdo señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: En consecuencia, se cita a los señores Ministros a la sesión que tendrá lugar el próximo lunes a las once horas y esta sesión se levanta.

SEÑOR MINISTRO DÍAZ ROMERO: Señor Presidente, aprovechando que el señor Ministro Góngora ha tenido la amabilidad de repartir sus argumentaciones, yo creo que sería conveniente tratar a una hora convenida para evitar nuevamente la discusión.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Yo creo que se levantó la sesión, pero dice el señor Ministro Díaz Romero que él sugeriría y además yo creo que esa sugerencia es obligada, que contando ya con el documento del señor Ministro, lo veamos y a lo mejor le ahorramos al Ministro Góngora el que tenga que leerlo, pero claro, si él insiste, pienso que está en todo su derecho.

SEÑOR MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL: Gracias señor Presidente.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 14:00 HORAS)